

REPÚBLICA DE COLOMBIA



MAGISTRADA PONENTE: MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA

PROCESO	ORDINARIO APELACIÓN AUTO
DEMANDANTE	JUAN GUILLERNO GALLEG0 ZAPATA
DEMANDADO	ESIMED S.A.
LITISCONSORTE	COLPENSIONES
RADICADO	05001-31-05-005-2020-00281-01
ORIGEN	JUZGADO QUINTO LABORAL DEL CTO DE MEDELLÍN
TEMAS Y SUBTEMAS	NULIDAD PROCESAL – Debido proceso Art. 29 CN
DECISIÓN	REVOCA

AUTO INTERLOCUTORIO No.019

Medellín, veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

En atención a lo previsto en el decreto 806 de 2020 convertido en legislación permanente a través de la Ley 2213 de 2022, una vez discutido y aprobado el presente asunto en la SALA QUINTA DE DECISION LABORAL, según consta en Acta N°060 de 2022, se procede a dictar AUTO INTERLOCUTORIO en orden a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del **DEMANDANTE**, contra el Auto Interlocutorio del 30 de agosto de 2022, proferido por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín, a través del cual rechazó de plano el incidente de nulidad propuesto por aquella parte.

ANTECEDENTES

A través de demanda ordinaria laboral, el señor **JUAN GUILLERNO GALLEG0 ZAPATA** deprecia que: **1)** Se declare que entre este y la sociedad **ESIMED S.A.**, sustituta patronal de la Corporación IPS Cruz Blanca y la Corporación IPS Saludcoop, ambas liquidadas, existió un contrato de trabajo vigente entre 2008 y 2018, culminado de manera unilateral e injusta por parte del empleador. **2)** Se declare responsable solidaria a la citada sociedad de las obligaciones laborales pendientes de cancelación por parte de las IPS mencionadas. **3)** En consecuencia, pidió condenar a **ESIMED S.A.** al pago de las prestaciones sociales y vacaciones que le son adeudadas, la indemnización por despido injusto, y el pago de los aportes a seguridad social en salud por el tiempo de duración del contrato. **4)** Así mismo, reclamó el pago de las sanciones moratorias consagradas en los artículos 65 CST y 99 de la Ley 50 de 1990.

En subsidio de lo anterior, solicitó: **5)** La declaratoria de existencia de contrato de prestación de servicios con **ESIMED S.A.**, iniciado el 1 de abril de 2016 y culminado el 30 de septiembre de 2018. **6)** Consecuencialmente, reclamó que sea condenada al pago de los honorarios profesionales causados por dicho periodo (f. 6 a 20 Archivo 03 ED).

Mediante Auto del 16 de diciembre de 2020 el Juzgado de primer grado vinculó al trámite a **COLPENSIONES** en calidad de tercero coadyuvante (Archivo 05 ED).

Notificadas la entidad accionada y la coadyuvante, la segunda procedió a pronunciarse sobre la demanda, mientras que, para la primera, a través de Auto del 18 de mayo de 2022, se tuvo por no contestada la demanda (Archivos 12 y 19).

Posteriormente, en audiencia de que trata el artículo 77 CPLSS, en la etapa correspondiente a la audiencia obligatoria de conciliación, el Juzgado la tuvo por superada, teniendo en consideración la certificación No. 029012021 del 9 de marzo de 2021 aportada por **COLPENSIONES**, a través de la cual conceptuó el comité respectivo, no proponer fórmula alguna. Respecto a **ESIMED S.A.** expuso que, además de no haber contestado la demanda, no ha sido posible entablar comunicación con esta, sumado a que el demandante desconoce contacto de ubicación de la accionada. En dicho trámite, el apoderado de la parte demandante, advirtiendo la inasistencia del representante legal de aquella, solicitó dar aplicación a las consecuencias procesales contenidas en el artículo 77 CPLSS, específicamente la confesión ficta.

Frente a dicha solicitud, el Juzgado la denegó, argumentando que, si bien **ESIMED S.A.** fue notificada conforme el Decreto 806 de 2020, siendo posible que dicho acto se presuma en cuanto al hecho de que la entidad conozca la existencia del proceso, conforme constancia de lectura del correo de notificación enviado, emitida por el servidor, y pese a todos los esfuerzos realizados por el Despacho, no se ha presentado ninguna justificación que lleve a respaldar que la ausencia de la entidad obedece a una justa causa, aspectos que darían lugar a declarar la confesión solicitada; no obstante, consideró que el apoderado en su solicitud no estableció cuales hechos pretende, sean cobijados por esta presunción, señalamiento en abstracto que lleva a negar la solicitud.

En contra de la anterior decisión, el apoderado de la parte accionante interpuso recurso de reposición, insistiendo en la aplicabilidad de la consecuencia procesal solicitada previamente; no obstante, el Juez de primer grado mantuvo su decisión de no acceder a dar curso a la confesión ficta peticionada, ante la omisión del mandatario de la parte, en punto a precisar cuáles hechos debían tenerse por confesados, citando como refuerzo de sus argumentos lo considerado en la Sentencia SL7145-2015.

INCIDENTE DE NULIDAD

De acuerdo con lo anterior, el apoderado de la parte promovió incidente de nulidad por violación al debido proceso (constitucional), alegando que, según lo dispuesto por el artículo 13 CGP, las normas procesales son de orden público y de obligatorio cumplimiento, llamado que hace el legislador, según dijo, a respetar la integridad de los preceptos procesales, añadiendo que, al tenor del artículo 48 CPLSS, es deber del Juez de adoptar las medidas necesarias para garantizar el debido proceso.

En ese sentido, consideró que hay vulneración de ese derecho, pues, a su juicio, lo dispuesto en el artículo 77 CPLSS es sumamente claro en disponer que, ante la inasistencia de alguna de las partes a la audiencia obligatoria de conciliación, el Juez debe aplicar la consecuencia aparejada allí, como lo es, tener por ciertos los hechos de la demanda susceptibles de confesión, los cuales deben ser verificados, no por las partes, sino por el funcionario judicial.

Expuso que justamente, el precedente citado por el fallador a-quo lo que consagra es que, si el funcionario pretende aplicar la sanción, debe hacerlo singularizando los hechos, y no de manera abstracta o general. Bajo esa idea, insistió en que la aplicación de la sanción en comento no es de la parte sino del Juzgador, dado que la función de la parte solo concierne a verificar que aquella se imponga en los términos establecidos por la Jurisprudencia,

violentándose entonces, el debido proceso, al no darle el alcance a la norma que es de estricto cumplimiento (Min. 13:30 a 18:54 Archivo 28 ED).

PROVIDENCIA APELADA

Al pronunciarse sobre la petición anulatoria propuesta por la parte demandante, el A quo consideró que, al ser las causales de nulidad taxativas, regladas en el artículo 133 CGP, lo argüido por el apoderado no se amolda y fundamenta en ninguna de las causales allí establecidas, siendo suficiente ello para rechazar de plano tal solicitud. Así mismo, expuso que, el mandatario promotor de la nulidad ni siquiera alega la transgresión a uno de los postulados estructurantes del debido proceso, partiendo del terreno del derecho a la defensa, toda vez que sus manifestaciones están referidas a la solicitud de prueba de confesión derivada de la conducta de la parte, perspectiva desde la cual, insistió en que, desde el extremo activo se formuló una solicitud abstracta, máxime que ni siquiera en la jurisprudencia se carga al Juez con la responsabilidad de precisar los hechos susceptibles de confesión, dado que, contrariamente, por ejemplo, en la Sentencia SL7145-2015 se dice que es la parte quien debe señalar al funcionario cuáles son esos hechos, carga que no genera violación al debido proceso, momento en el que, discriminó el acto de la parte y los actos del Juez. En consecuencia, declaró improcedente la solicitud de nulidad formulada.

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la anterior determinación el apoderado judicial del **DEMANDANTE** interpuso recurso de apelación, manifestando que la violación al debido proceso no es una de las causales de nulidad estipuladas en la norma procesal general, pero afirmó, el contenido axiológico del artículo 29 CN, se caracteriza por ser aplicado a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, citando para ello la sentencia C-491 de 1995, lo que justifica que la formulación del incidente no sea legal, sino constitucional.

En ese sentido, reiteró lo argumentado en anteriores intervenciones, esto es, que el Legislador es quien impone a la judicatura el deber de imponer las consecuencias procesales, y no las partes, obligación legal consagrada en la normativa procesal, para lo cual se remitió a Sentencias como las SL572-2018, SL6843-2016 SI7145-2015 y SL013-2013.

A través del Auto de la misma fecha, se concedió la apelación (Archivo 29).

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Mediante Auto del 16 de noviembre de 2022, se dispuso correr traslado a las partes para que presentaran sus alegaciones finales; no obstante, los contendientes omitieron pronunciarse al respecto (Archivo 02 ED Tribunal).

PROBLEMA (S) A RESOLVER

El problema jurídico se centra en establecer si es procedente declarar la nulidad del Auto a través del cual el Juzgado de primer grado negó la aplicación de las consecuencias procesales establecidas en el artículo 77 CPLSS –confesión ficta-, por violación al debido proceso.

CONSIDERACIONES

Sea lo primero reseñar que en atención a lo reglado en el numeral 6° del artículo 65 del CPTSS, según el cual el auto que decida sobre nulidades procesales es susceptible del recurso de apelación, esta Sala de Decisión es competente para dirimir el presente asunto, para lo cual, se seguirán los lineamientos trazados por el artículo 66A del CPTSS, es decir, ciñéndose a lo que es motivo de la impugnación.

Como quedó visto en los antecedentes fáctico-procesales de la presente decisión, la parte demandante alega la existencia de un vicio procesal en la determinación del Juzgado de primera instancia tendiente a negarse a aplicar la consecuencia que apareja el numeral 2° del inciso 7° artículo 77 CPLSS, el cual, ante la inasistencia de las partes a la audiencia de conciliación, contempla que: “(...) Si se trata del demandado, se presumirán ciertos los hechos de la demanda susceptibles de confesión. (...)”. Lo anterior, fundamentado en el hecho de que para la solicitud de insistencia de esta sanción, elevada por el apoderado de la parte actora, dentro de la etapa correspondiente, omitió indicar cuales hechos eran los susceptibles de tener confesados.

Al resolver la petición anulatoria, el A quo la rechazó de plano diciendo que, la nulidad propuesta no aparece entre las enlistadas en el artículo 133 CGP, y además reiteró que, conforme Sentencia SL7145-2015, corresponde al litigante relacionar aquellos supuestos fácticos que se tendrán por confesados, conclusión a la que, se opuso el extremo activo, al mencionar que, justamente el Legislador le impone a la judicatura la obligación imponer las consecuencias procesales, cuestión que, contrario a lo sostenido en la decisión apelada, le corresponde al Juez y no a la parte, conforme lo tiene adocinado la Jurisprudencia Especializada Laboral, argumentos a partir de los cuales argumentó, se configura una nulidad constitucional por vulneración al debido proceso.

Para desatar esta controversia, huelga recordar que, como el estatuto procesal del trabajo no contempla dentro de su articulado el régimen de nulidades, es necesario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 del CPTSS, acudir a al Código General del Proceso, norma que consagra puntualmente las causales configurativas de esta en su artículo 133. Dicho régimen de nulidades se forja como instrumento encaminado, principalmente, a materializar prerrogativas como el debido proceso y el derecho de defensa, atendiendo, entre otros, al principio de especificidad.

Debido a este último aspecto, se ha dado suma relevancia a la característica taxativa que envuelve este remedio procedimental, destinado como se dijo, a enderezar ciertos vicios procesales generados en el curso del litigio, y excepcionalmente después de dictarse sentencia, si ocurriera en ella, encontrando norma regulatoria de la oportunidad para su interposición, y la forma en que opera su saneamiento.

Desde esa órbita, anota la Sala, para que haya lugar a la declaratoria de alguna causal de nulidad, debe respetarse la noción de taxatividad que las envuelve, y solo pueden ser alegadas con base en hechos y motivos previa y expresamente contemplados en el artículo 133 CGP, circunstancia que en principio, daría lugar a desechar la petición anulatoria de la parte demandante, como en efecto lo decidió el Juez de primer grado; no obstante, es imperioso destacar que de tiempo atrás la Jurisprudencia tanto Constitucional como Laboral, ha sido condescendiente con el acontecer del debate procesal, entendiendo la existencia de situaciones que, si bien escapan del relato expreso de los supuestos fácticos contenidos en la lista de causales de nulidad regladas hoy en la legislación, constituyen una afrenta a la garantía del debido proceso para alguna de las partes, que necesariamente debe remediarse.

A partir de esta consideración, ha tenido desarrollo la denominada nulidad constitucional por violación al debido proceso, por ejemplo, en la Sentencia T-330 de 2018 en la que se dijo:

*“(...) En primer lugar, es importante examinar si se trata de una irregularidad menor que no afecta el debido proceso. (...) **Según esta consideración, se está ante una ilegalidad que compromete el debido proceso, bien sea cuando se han afectado las reglas sustantivas que protegen la integridad del sistema judicial o que buscan impedir que se tomen decisiones arbitrarias** (...)”.*

(...)

es necesario considerar el alcance del concepto de debido proceso al cual alude la norma constitucional, esto es, si se refiere exclusivamente a las reglas procesales o si también incluye las que regulan la limitación de cualquier derecho fundamental, como la intimidad,

*el secreto profesional y la libertad de conciencia. **En Colombia, se ha dicho que el concepto de debido proceso es sustancial, esto es, comprende las formalidades y etapas que garantizan la efectividad de los derechos de las personas y las protegen de la arbitrariedad de las autoridades, tanto en el desarrollo de un proceso judicial o administrativo como, además, frente a cualquier actuación que implique la afectación de derechos constitucionales fundamentales. (...)***

De ahí que el precedente mencionado plantea la necesidad de efectuar el análisis particular de cada caso, en el cual la decisión de rechazar la solicitud de nulidad por no estar ajustada a ninguna de las establecidas en el artículo 133 CGP, puede, según el caso, configurar una actuación ciertamente lesiva al derecho sustancial, atentatoria igualmente contra el debido proceso, erigiéndose, incluso como un exceso ritual manifiesto. Así lo precisó cuándo anotó: “(...) *En el caso concreto la omisión de tener en cuenta la prueba mencionada por cuanto no se ajustaba a ninguna de las causales consagradas en el artículo 133 del Código General del Proceso, se traduce en un claro exceso ritual manifiesto que lesiona los preceptos constitucionales que garantizan el debido proceso y la prevalencia del derecho sustancial en las actuaciones judiciales. (...)*”.

En concordancia con lo anterior, la Sala de Casación Laboral también ha aceptado, que, a la par de los motivos de nulidad nominados en la norma adjetiva, se invoque la nulidad “constitucional” por transgresión del artículo 29 superior, según lo dio a entender en Auto AL4032-2022: “(...) *De ahí, que las que dan lugar a su declaratoria son taxativas y solo pueden alegarse por los hechos y motivos previa y expresamente contemplados en el artículo 133 del CGP, aplicable a los asuntos laborales por expresa remisión del artículo 145 del CPTSS y, adicionalmente, puede invocarse la nulidad constitucional prevista en el artículo 29 superior, por violación al debido proceso. (...)*”.

Pese a lo anterior, también es imperativo revisar los principios que rigen el régimen de nulidades, destacándose entre estos, el de **trascendencia**, bajo el cual la doctrina ha considerado que no basta con la existencia de una irregularidad, sino que pasa a ser indispensable que el vicio advertido transgreda el debido proceso de la contraparte, que en últimas es el objetivo proteccionista por el que propende la institución de la nulidad, iterándose, que no es suficiente para dejar sin efectos determinada actuación, el simple dislate formal para desencadenar en motivo de anulación.

De esa forma lo ha recabado la Sala de Casación Civil de la CSJ, citándose a manera de ejemplo la Sentencia SC15413-2015:

*“(...) La nulidad surge como uno de los principales mecanismos que procura la salvaguarda de las formas propias del juicio, **siempre que afecten de modo importante la eficiencia del mismo**, por estar concebida excepcionalmente para aquellos casos en que el vicio no pueda corregirse de otra manera por no alcanzar el acto su finalidad.*

(...)

*Las nulidades procesales son de interpretación restringida y no admiten analogía. Se orientan bajo los principios de especificidad, según el cual aquellas no se producen si no hay norma que expresamente la consagre, el principio de protección, es decir que mientras no se declare una nulidad, el acto se considera válido y surte plenos efectos, el de disponibilidad que permite su renuncia, el de lealtad procesal que obliga a las partes a reclamarla inmediatamente la hayan observado, el de preclusión porque si la parte interesada no alega el vicio en su momento, pierde la oportunidad de hacerlo y el de **trascendencia, referido a la necesidad de que la irregularidad reclamada para que opere debe causar un perjuicio a la parte que la alega.** (...)”.*

Puestas las cosas de ese modo, en el particular la discusión gira en torno a la posible transgresión al debido proceso atribuida al Juez de primer grado, al negarse a dar aplicación a la consecuencia procesal descrita en líneas anteriores.

En efecto, como bien es sabido, el proceso ordinario laboral de primera instancia aparece estructurado para desarrollarse en dos (2) audiencias que agrupan cierto número de etapas concatenadas y preclusivas. La que importa en este caso, es la reglada en el artículo

77 CPLSS, denominada también “AUDIENCIA OBLIGATORIA DE CONCILIACIÓN, DECISIÓN DE EXCEPCIONES PREVIAS, SANEAMIENTO Y FIJACIÓN DEL LITIGIO”, a la cual el Legislador presupuso como obligatoria la asistencia de las partes (concepto que hace alusión a la parte como tal o a su representante legal, y no a su apoderado), a la etapa de **conciliación**, y, quien no asistiera sin excusa justificada, se vería abocado a la sanción o consecuencia establecida en el inciso 7° de dicho artículo:

“(…) si el demandante o el demandado no concurren a la audiencia de conciliación, el juez la declarará clausurada y se producirán las siguientes consecuencias procesales:

1. Si se trata del demandante se presumirán ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la contestación de la demanda y en las excepciones de mérito.

2. Si se trata del demandado, se presumirán ciertos los hechos de la demanda susceptibles de confesión. (…)

Nótese entonces que la codificación adjetiva laboral plasma una consecuencia concreta y bien delimitada por la ley procesal, ante la inasistencia sin justificación de las partes, consistente en tener como ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la demanda o en la contestación, según sea la situación, resáltese, **sin requerir otra clase de análisis más que la falta de comparecencia de los obligados, y la precisión de los hechos a tener por confesos, pues sobre aquellos que no pueda declararse la confesión ficta, la misma normativa consagra que se tendrán como indicio grave en contra de la parte que no asistió.**

En esos términos lo ha recabado la Sala de Casación Laboral de la CSJ de tiempo atrás, por ejemplo, en la Sentencia dictada el 6 de febrero de 2013 Rad. 40498 en la que precisó:

*“(…) Así entonces, resulta claro que la declaratoria de confeso tuvo su fundamento en el artículo 77 del CPTSS, que es la norma que regula de manera específica dicha hipótesis. Pero que ello sea así, no quiere decir en modo alguno que la posición de fondo del Tribunal sea errada, porque el alcance de esa disposición **no puede ser el que implícitamente le otorga el recurrente al aducir que basta la atestación de falta de asistencia de una de las partes, en este caso una de las demandadas, para que automáticamente se presuman ciertos los hechos de la demanda, sino que además el juez debe dejar constancia sobre cuáles de los hechos de la demanda se configura la confesión ficta que la norma estatuye, única forma de que se respete el derecho de defensa y el debido proceso de dicha parte, que a partir de esa precisión tendrá claro sobre cuáles hechos gravita la declaración judicial y pueda dirigir su esfuerzo procesal a desvirtuarlos.** (…)*” (Subraya y Negrilla de la Sala).

Así mismo, recientemente, en Sentencia SL751-2021, rememoró lo considerado en la Sentencia SL2658-2020, en la cual recordó que, lo anterior, es decir, aplicar o no la sanción descrita en las condiciones reseñadas, se aleja de ser una función potestativa del funcionario judicial, a la que, bajo su albedrío, pueda considerar viable o no la imposición de la consecuencia evocada, siendo muestra de ello que el Alto Tribunal considere que la parte interesada, tiene plena facultad para exigir del Juez de la causa, incluso recurriendo la determinación que aquel asuma, el pronunciamiento que corresponde respecto de la citada sanción. Así lo recabó al decir:

“(…) Al realizarse la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio (f.º 295 a 296) consagrada en el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el Juzgado dejó constancia de la presencia de los apoderados sustitutos de la Fiduciaria Popular SA y Caprecom.

Siguiendo el hilo conductor, la etapa conciliatoria culminó con la declaratoria de clausurada «[...] sin que se haya hecho presente el demandado COOPSANJOSE». Tampoco comparecieron, la ESE Francisco de Paula Santander y la Nación Ministerio de Salud y de la Protección Social.

En ese orden de ideas, si bien fue notoria la omisión del Juzgado, al no haber fijado las consecuencias procesales sancionatorias pertinentes, es decir, tener por ciertos los hechos de la demanda susceptibles de confesión; ante la no presencia de los señalados sujetos

procesales, sin verificar que existiese prueba siquiera sumaria de su ausencia, lo cierto es que, la parte interesada debió solicitar en ese momento, el pronunciamiento correspondiente del a quo, a través de la reposición de la decisión y, al guardar silencio, este acto procesal quedó ejecutoriado. En consecuencia, esa falencia no la podía llenar el ad quem. Sobre el particular, la corporación en sentencia CSJ SL1089-2018, sostuvo:

Ahora bien, teniendo en cuenta que las demás demandadas no asistieron a dicha audiencia, es del caso señalar que la jurisprudencia de esta Corporación ha reiterado copiosamente que, frente a la inasistencia de una de las partes a la mencionada audiencia obligatoria de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio, es necesario que el juez expresamente indique cuáles son los hechos que se tienen por ciertos, cosa que no ocurrió en el presente asunto, razón por la cual no se puede vislumbrar confesión alguna. (...)”

Luego, en la misma decisión, el Órgano de Cierre reiteró su postura de vieja data relativa a que, el único competente para fijar el alcance de la confesión en esta clase de circunstancias es el Juez: “(...) Y es que lo pretendido por la censura, en últimas, es que esta Corporación, por vía del recurso extraordinario de casación, declare la confesión ficta ante la inasistencia de la demandante a la audiencia obligatoria de conciliación, decisión de excepciones previas y saneamiento y fijación del litigio, y a la diligencia de interrogatorio de parte, en desconocimiento de la jurisprudencia reiterada y constante de esta Sala, según la cual esta función corresponde exclusivamente al juez de primera instancia, ante quien se celebran las respectivas audiencias previstas por la ley procesal del trabajo y de la seguridad social, por lo que, ante la ausencia de declaratoria de la confesión o el incumplimiento de las condiciones jurisprudenciales (ver sentencias SL7145- 2015 y CSJ SL, 22 jun. 2007, rad. 30560, reiterada más recientemente en la providencia SL1560-2014), no puede la Corte entrar a subsanar este aspecto. (...)”.

Así entonces, analizado el actuar del Juez de primera instancia frente a la aplicabilidad de la consecuencia analizada, considera la Sala que, en efecto, logra configurarse una desatención importante al reglamento procesal, a la hora de negarse a aplicar la confesión ficta en contra de **ESIMED S.A.**, por no haber comparecido a la audiencia reglada en el artículo 77 CPLSS, más cuando la PARTE DEMANDANTE le solicitó en reiteradas ocasiones que procediera conforme lo establecido en la norma, haciendo uso, incluso del recurso de reposición en contra de tal determinación, encontrando como respuesta del Juzgador una postura reiterativa, direccionada a abstenerse de dar curso a las previsiones del procedimiento laboral.

Tal premisa se robustece al revisar las razones en las que el A quo sustentó su decisión, esto es, atribuyéndole una presunta omisión a la parte, de quien señaló, era el encargado de precisar de los hechos esbozados en la demanda, sobre cuales recaería la confesión ficta, apreciación totalmente desacertada, pues, incluso la Jurisprudencia que citó para reforzar su idea, contraría vehementemente su posición, al ser clara en que el competente para calificar, individualizar o identificar los hechos susceptibles de confesión contenidos en el gestor, no es nadie distinto al Juez de primera instancia.

En igual sentido, el dislate del funcionario cobra relevancia, si se tiene en cuenta la incidencia que puede tener la consecuencia explicada para el trámite del proceso, y, en especial, para los intereses de la parte promotora de la nulidad, la cual ve reflejada su trascendencia más adelante, representada en cierta ventaja probatoria, que si bien podría ser infirmada por disposición del artículo 166 CGP, no es dable dejar de lado su posible preponderancia a la hora de resolver los pilares del litigio, argumentos todos que conducen a concluir en la vulneración flagrante al procedimiento laboral, lo que obliga, en sentir de la Sala, a disponer que se rehaga la actuación, teniendo en cuenta las previsiones legales y del precedente citados.

En consecuencia, habrá de revocarse el Auto del 30 de agosto de 2022 a través del cual se rechazó la nulidad propuesta por la parte demandante, para en su lugar, declarar nulo parcialmente por violación al debido proceso, el Auto mediante el cual se negó el Juzgado a aplicar las consecuencias procesales de que trata el artículo 77 CPLSS en contra de **ESIMED S.A.**, a efectos de que proceda a imponerlas conforme lo establecido en esta normativa y la jurisprudencia.

Sin costas por no aparecer causadas.

Sin que sean necesarias más consideraciones, la **SALA PRIMERA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI**,

RESUELVE

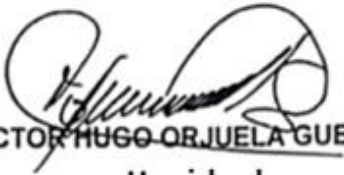
PRIMERO: REVOCAR el Auto del 30 de agosto de 2022 proferido por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín, para en su lugar, declarar **NULO** parcialmente el Auto de la misma fecha, a través del cual el Juzgado negó la aplicación de las consecuencias procesales de que trata el artículo 77 CPLSS en contra de **ESIMED S.A.**, a efectos de que proceda a imponerlas conforme lo establecido en esta normativa y la jurisprudencia.

SEGUNDO: Sin **COSTAS** en esta instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,


MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA
Magistrada


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN –
SALA LABORAL - HACE CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por estados N ° 216 del 30
de noviembre de 2022

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/100>